

► EDUCACIÓN

El PSOE exige garantizar por ley el cobro de todas las becas concedidas

Planteará en las Cortes una propuesta legislativa que impida que centenares de alumnos se queden sin percibir las ayudas, por falta de presupuesto, pese a cumplir con los requisitos

• Pide a la Junta que dedique una centésima parte de la ampliación del déficit a abonar las 1.356 ayudas a estudiantes que se han quedado «fuera» por falta de presupuesto.

ICAL / VALLADOLID

El secretario autonómico del PSOE, Julio Villarrubia, anunció ayer que el PSOE presentará una proposición de ley para que se fijen por ley los criterios de concesión de becas universitarias y para que se garantice que todos los alumnos a los que se les sea reconocida reciban su cuantía y no pueda suceder que un alumno con derecho a beca no la reciba por falta de presupuesto.

Así lo señaló Villarrubia durante la presentación de una campaña en defensa de la educación pública junto con el secretario autonómico de Educación, Enrique Cabero. Según el socialista, hay 1.356 alumnos que aún habiéndoseles concedido la beca, ahora se les dice que no pueden pagar porque no hay presupuesto, personas que, incluso, añadió, ya tienen aprobadas las asignaturas pero que no pueden hacer frente a la matrícula.

Por ello, anunció la defensa de esta proposición de ley, que el PSOE defenderá después del verano cuando se reanuden las sesiones ordinarias de las Cortes de Castilla y León y que ha de servir para que esta situación no se produzca y en caso de que ocurra que los afectados puedan reclamar a la justicia. A su juicio, tiene que haber «una evaluación de requisitos en defensa de los principios de igualdad que es lo que ataca frontalmente el PP», remarcó.

El objetivo, continuó, es que la concesión de becas universitarias se haga por ley y no arbitrariamente según la disponibilidad presupuestaria. Además, pidió a la Junta que «con una pequeña parte» del margen de déficit que previsiblemente dará el Gobierno a las comunidades autónomas se dedique a pagar las becas universitarias. Según sus cálculos una décima más de déficit supondrá 60 millones de euros, con lo que con una centésima se podría pagar a todos los estudiantes con derecho a beca y también reabrir las urgencias nocturnas en la Comunidad.

AÑO DIFÍCIL. El secretario autonómico de Educación de los socialistas abundó en la situación de esta materia en la Comunidad, para señalar que tras un año «difícil y sin precedentes» el sistema no puede soportar más recortes, como también ha afirmado el consejero de Educación, Juan José Mateos. Con 500 millones de eu-



El secretario autonómico del PSOE, Julio Villarrubia, informa de la reunión de la Permanente de la Ejecutiva. / M. CHACÓN (ICAL)

ros menos de presupuesto en un solo año el sistema está «al límite del desmoronamiento» y si ha soportado la situación ha sido, a su juicio, «por el esfuerzo formidable de toda la comunidad educativa».

«En un año hay menos profesionales, menos medios, se ha puesto en peligro la escuela rural y la igualdad», sostuvo, para cri-

ticar también el que se haya puesto en peligro la igualdad en el sistema universitario con un incremento de precios «desorbitado».

Por eso, exigió a la Junta que vuelva «como mínimo» a las previsiones presupuestarias del año 2011, anteriores a los recortes para «deshacer» los grandes proble-

mas generados y para garantizar las becas. También, solicitó la derogación del Decreto Ley de abril de 2012 que «institucionaliza» los recortes y la retirada de la Ley Wert para reformar «con diálogo». «Hay que recuperar el tiempo perdido y vamos a intentar paliar los daños de este curso», concluyó Enrique Cabero.

Mateos: «Quedarse sin ayuda no implica no poder estudiar»

ICAL / SEGOVIA

El consejero de Educación, Juan José Mateos, manifestó «que un alumno se haya quedado sin beca no quiere decir que no pueda estudiar». Preguntado por la reducción de ayudas a estudiantes, explicó que aunque la realidad sea dura y muchas familias tengan dificultades, una cosa es que no se ofrezcan recursos y otra que se impida el acceso de tener unos estudios universitarios.

Durante la visita al IES Andrés Laguna de Segovia, que celebra su 50 aniversario, el titular de Educación aseguró que la Junta apoyará a las familias de Castilla y León para procurar que no se discrimine a quienes no tienen recursos para, por ejemplo, acceder a los libros de texto.

En este sentido, Mateos explicó que aún quedan dos o tres meses para encajar las ayudas en el proyecto de los presupuestos para el curso que viene, e incidió en que Educación «convive con los



Mateos (i) junto al director del IES Andrés Laguna de Segovia. / R. BLANCO (ICAL)

problemas» de los castellanos y leoneses. En año difícil marcado por el ahorro y la reducción en el gasto, Mateos celebró que «los resultados están siendo buenos» gracias al esfuerzo de alumnos, profesores y familiares. Así, señaló que el Gobierno regional ha puesto todos los medios dispo-

nibles para garantizar una educación considerada como «una de las mejores que tiene el país».

«Con sacrificios iremos mejorándola poco a poco», resaltó el consejero acompañado del director del centro, Santiago Pinto y el delegado territorial de la Junta, Javier López-Escobar.

► ENERGÍA



García Tejerina y Carlos Cuadros.

Los promotores de renovables rechazan ser responsables del déficit de tarifa

ICAL / VALLADOLID

La Asociación de Promotores Eólicos de Castilla y León (Apeycl) reclamó ayer a las administraciones, reguladores del sector de las renovables, un marco estable que elimine de un plumazo las incertidumbres generadas en los últimos años con las diferentes modificaciones de las normativas y rechaza ser los culpables del déficit de tarifa.

Así lo aseguró el secretario general de la organización, Eugenio García Tejerina, quien pidió al Ministerio de Industria el desarrollo de políticas que contribuyan a recuperar la confianza de los inversores, tanto nacionales como extranjeros. Para ello, añadió, es necesaria una estabilidad «y no un decreto ley cada poco, que no es una buena medida».

Según Apeycl, esa inestabilidad «afecta al acceso al crédito por la falta de seriedad», pues ninguna entidad financiera otorga dinero ahora porque conoce la situación del sector. De hecho, a los 5.500 megavatios que Castilla y León tiene en la actualidad en funcionamiento, se deberían sumar en los próximos años, a la espera de conocer la normativa definitiva y superar la moratoria establecida desde Industria, casi otros 2.000 megavatios que cuentan con autorización de instalación. A razón de 1,1 millones de euros de inversión por cada megavatio, se trata de 2.200 millones de euros de inversión que en estos momentos podrían estar en riesgo por culpa de la incertidumbre tan reiterada desde el sector, como ya había denunciado Apeycl.

Además, demandó al departamento dirigido por el canario José Manuel Soria una visión de futuro a largo plazo y perspectiva histórica, «que es fácil perderla, agobiados por el corto plazo». «El sector energético hay que regularlo pensando a 20 años y no a uno. Se debe centrar a largo plazo y abstraerse del agobión», espetó.